

■ No hay personal preparado para ayudarlos en la escolarización y algunos trabajadores creen que ese es un mal menor para estos niños, "siendo que el éxito escolar es, quizás, su herramienta de salida", dice una experta. Actores involucrados piden crear una política nacional que garantice su nivelación y acceso a una educación de calidad.

MARÍA FLORENCIA POLANCO

En Chile, hay 3.216 niños y adolescentes en edad escolar —entre 6 y 17 años— que viven en una residencia tras haber sido gravemente vulnerados en sus derechos. De ellos, según las últimas cifras del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Sename), de agosto de 2024, 373 (11,6%) están sin matrícula o retirados de un establecimiento y 248 (7,7%) tienen inasistencia.

Al problema de la desprotección y desescolarización, dicen actores involucrados, se suma otro obstáculo crítico en su desarrollo: la falta de un sistema que los ayude a nivelar sus aprendizajes y avanzar en sus estudios.

"La brecha académica de los niños institucionalizados es una situación que no está siendo abordada", advierte María Ignacia Valenzuela, cofundadora de Sube Chile junto a Alejandra Verdugo,

“Hay jóvenes que no saben sumar o restar y en el colegio les están hablando de ecuaciones o álgebra. Por lo mismo, terminan repitiendo o desertando”.

MARÍA IGNACIA VALENZUELA
 COFUNDADORA DE SUBE CHILE

iniciativa de apoyo educativo en residencias. En alianza con la Fundación Educacional Barnechea, trabajan en cuatro instituciones de protección, donde además capacitan a las cuidadoras con herramientas de enseñanza. En sus intervenciones han levantado distintos diagnósticos, y los hallazgos son alarmantes.

"Te encuentras con niños con un retraso de dos o tres años en lectura y matemática. En enseñanza media el rezago puede llegar a ser de siete años. Hay jóvenes que no saben sumar o restar y en el colegio les están hablando de ecuaciones o álgebra. Terminan repitiendo y desertando", grafica Valenzuela.

Verónica Gross, psicóloga y líder de transferencia y aprendizaje del Centro de Innovación y Estudios de la Corporación Crecer Mejor, agrega que, producto de su situación de vulneración, "muy pocos niños llegan en el nivel escolar que les corresponde y les va muy mal en el colegio". A su vez, por el daño emocional que arrastran tienen problemas de convivencia, "y muchos tienen que cambiarse varias veces de escuela".

"Las residencias hacen un esfuerzo grande, pero no tienen el personal preparado ni suficiente para acom-



En Chile, hay más de 3 mil niños en edad escolar, de entre 6 y 17 años, que viven en residencias a causa de la vulneración de sus derechos.

En enseñanza media, el rezago puede ser de hasta siete años:

La postergada urgencia de reducir la brecha educativa de los escolares que viven en residencias

pañar el proceso de escolarización", añade Loreto Vial, gerente general de la Fundación Educacional Barnechea. Y advierte que "al mismo tiempo, el personal que los atiende puede sentir que la escolarización es el menor de los problemas de ese niño, siendo que el éxito escolar es, quizás, su herramienta de salida", plantea.

La escuela no basta

La Villa Jorge Yarur Banna, la residencia de niñas de la Corporación Crecer Mejor, en La Pintana, ha logrado abordar el tema con un equipo que incluye educadores y manteniendo un diálogo con las escuelas. Sin embargo, a Gross le preocupa que sea algo discrecional. "Algunos colegios te ayudan con apoyo especial. Si mantienes una muy buena conversación con el colegio, se puede lograr, pero es cuestión de voluntad", asegura.

Frente a esto, las expertas concuerdan en que falta una política nacional que garantice que todos los niños que viven en residencias sean nivelados en sus aprendizajes. "Se necesitan iniciativas que permitan homolgar criterios. Hoy día pasa

que si un niño es derivado a una buena residencia va a tener más oportunidades que si llega a una con menos recursos", plantea Gross.

Tally Arriagada (26), quien egresó de una residencia, hoy estudia Psicología y es cofundadora de la Red Egresada (que apoya a jóvenes en residencias a través de talleres y charlas), concuerda: "Depende mucho del criterio de cada institución y de las voluntades. Hay instituciones que le ponen mucha cabeza a la educación y otras que no".

En las escuelas también observan este problema. "A nivel de normativo, en los colegios no hay ningún programa que trabaje con los niños institucionalizados. Hacemos intervenciones de acuerdo a lo que cada uno estima conveniente", cuenta Manuel Urrutia, director del Instituto Politécnico María Auxiliadora, de Puerto Montt.

Y suma: "Es un foco que nunca se ha considerado de manera especial en la legislación, ni en los planes de revinculación; tampoco en las orientaciones ministeriales. Me parece muy interesante problematizar esta situación, ya que existen particularidades en la relación de los co-

legios con instituciones como Mejor Niñez (como también se conoce al servicio de protección estatal), que son muy diferentes a los vínculos que se establecen con las familias".

Como ni los colegios ni todas las residencias logran abordar el problema, una opción que se propone es que a los equipos que trabajan en las residencias se sumen docentes de forma permanente para que apoyen en la nivelación. "Las escuelas deben suplir esa brecha, y no lo están logrando. Un sueño es que en cada residencia haya dos profesores, un coordinador de educación y un psicopedagogo", dice Valenzuela.

"Sería muy interesante su rol. Un profesor no iría a hablarles de su vulneración, iría a aportarles algo", opina Arriagada.

Más articulación

Para Gross, una mejor articulación entre el servicio de protección y las escuelas es clave: "Necesitamos una política que permita trabajar en conjunto para que los niños progresen en el sistema escolar. Uno de nuestros objetivos es que los niños restituyan todos sus derechos, el de-

recho a la educación también".

Sobre esta carencia, Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, asegura que el nuevo modelo residencial, que regiría desde el segundo semestre de este año en 74 residencias, se haría cargo del tema.

"Cuando hay un adulto por cada ocho niños, es menos probable que ese cuidador logre un nivel de confianza y apoyo permanente. Estamos proponiendo un modelo en el que habrá un adulto cada tres niños, para que pueda apoyarlo en materias de educación, acompañarlo al centro de salud, que sea un adulto de confianza", dice Castillo.

Gross valora el nuevo modelo, pero advierte que "los cuidadores terapéuticos no son profesores" y cumplen muchas tareas. Castillo, por su parte, señala que "un cuidador terapéutico puede ser un profesor".

Hoy Mejor Niñez no cuenta con información individual de la trayectoria académica de los niños en residencias. "El desafío para este año es tener un monitoreo longitudinal, es decir, hacer un seguimiento de la trayectoria de cada niño", dice Castillo.